

Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito laboral del sector público; y la participación efectiva de las mujeres en el instituto colombiano para la evaluación de la educación - icfes

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA BASADAS EN GÉNERO Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RAZA, ETNIA, RELIGIÓN, NACIONALIDAD, IDEOLOGÍA POLÍTICA O FILOSÓFICA, SEXO, IDENTIDAD DE GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL O DISCAPACIDAD, Y DEMÁS FORMAS O RAZONES DE DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO; Y LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS MUJERES EN EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. MARCO NORMATIVO	6
2.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD	6
2.2. ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL	7
3. OBJETIVOS	10
3.1 OBJETIVO GENERAL	10
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
4. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	12
4.1. SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	12
4.2. TIPOS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO	14
4.3 COMPORTAMIENTOS QUE LAS PERSONAS SUJETAS DE ESTE PROTOCOLO DEBEN ABSTENERSE DE EJECUTAR	17
4.4 ACTOS DE DISCRIMINACIÓN	18
5. ENFOQUES DIFERENCIALES, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES.....	20
5.1. ENFOQUES.....	20
5.2. PRINCIPIOS	23
6. DERECHOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS	24
6.1. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS	24
6.2. DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS	25
6.3. DERECHOS DEL SUJETO ACTIVO	27
7. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIONES.....	28
7.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN	28
7.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN	29
8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN	30
9. RUTAS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	31
9.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS RUTAS DE ATENCIÓN.....	31
9.1.1. <i>Deberes de los superiores</i>	31
9.1.2. <i>Integralidad de la acción disciplinaria</i>	32
9.1.3. <i>Continuidad de la ruta de prevención</i>	33

9.1.4. Deber de denunciar de los servidores públicos	33
9.2. RUTAS EXTERNAS DE ATENCIÓN EXTERNAS	33
9.3. RUTAS DE ATENCIÓN EN CASO DE QUEJA CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.....	34
9.3.1. Recepción de la queja y análisis de las pruebas	34
9.3.2. Órgano competente de control interno disciplinario	34
9.3.3. Reglas de procedimiento.....	35
9.3.4. Enfoque diferencial y de género en la ruta de atención interna	35
9.3.5. Clasificación de las faltas	37
9.4. RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE QUEJA CONTRA CONTRATISTAS, PASANTES, JUDICANTES, PRACTICANTES O PERSONAL EN COMISIÓN	40
9.4.1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el Protocolo	40
9.4.2. Traslado a la autoridad competente.....	40
9.4.3. Medidas administrativas para la no repetición	40
10. MEDIDAS DE REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN	41
10.1. OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.....	41
10.1.1 ESPACIOS COLECTIVOS.....	41
11. MECANISMOS EFECTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ICFES.....	42

1. INTRODUCCIÓN

Para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, importante participar en la construcción de una sociedad más igualitaria, así como en la eliminación de cualquier forma de discriminación y de violencia, o en cualquier manifestación de desigualdad que pueda llegar a presentarse.

Para lograr cambios concretos y avanzar e impactar en las estructuras sociales, es necesario realizar acciones que promuevan el respeto y fortalecer la prevención, atención y protección de los colaboradores y las colaboradoras y usuarios o usuarias del Instituto de situaciones que puedan llegar a afectarles. Para esto, es necesario construir espacios de trabajo seguros, en donde prime la protección de las personas y cada uno de los derechos que la Constitución y la Ley otorga.

De la misma manera, resulta fundamental para el entorno laboral del Icfes, establecer mecanismos efectivos para la participación de las mujeres.

En este orden de ideas, el presente Protocolo se constituye como una de las varias herramientas encaminadas a informar, orientar y a dar la mayor claridad en los conceptos, conductas, normas, para la denuncia efectiva, la prevención de conductas que puedan afectar la dignidad humana y la buena convivencia y el establecimiento de mecanismos efectivos para la participación de las mujeres en el Instituto.

2. MARCO NORMATIVO

Lo primero, es tener presente y claras las normas en todos sus niveles, que desarrollan de una forma u otra la atención y medidas de protección de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público; y la participación efectiva de las mujeres en las diferentes instancias de la administración pública.

2.1. Marco constitucional y bloque de constitucionalidad

A continuación, se describen las normas que hacen parte del marco constitucional del presente protocolo:

- Constitución Política de 1991
- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)
- La Convención sobre los Derechos del Niño
- Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
- Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer
- Declaración y Programa de Acción de Viena
- Convención Americana sobre Derechos Humanos

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (Convención Belém Do Pará)
- Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia
- Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género Principios de Yogyakarta"
- Convenio sobre la violencia y el acoso No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo

2.2. Ordenamiento jurídico nacional

A continuación, se describen las normas que hacen parte del marco legal y jurisprudencial del presente protocolo:

- Ley 82 de 1993: expide normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la Mujer Cabeza de Familia.
- Ley 294 de 1996: por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
- Ley 575 de 2000: por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.
- Ley 581 de 2000: por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del Poder Público.
- Ley 679 de 2001: por medio de la cual se expide un estatuto para prever y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.
- Ley 731 de 2002: por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales

- Ley 750 de 2002: por la cual se expiden normas sobre el apoyo, especialmente en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a las mujeres cabeza de familia.
- Ley 800 de 2003: por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
- Ley 823 de 2003: por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres.
- Ley 1009 de 2006: por la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de asuntos de género.
- Ley 1023 de 2006: por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al sistema de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1257 de 2008: por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones y sus respectivos decretos reglamentarios.
- Ley 1413 de 2010: por medio de la cual se controla la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.
- Ley 1475 de 2011: por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Ley que ha permitido las cuotas en la conformación de listas a cargos de elección popular.
- Ley 1448 de 2011: por la cual se establecen medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Establece normas específicas para las mujeres en los artículos 114 al 118. En esta Ley se establece el Decreto 4635 de 2011 sobre comunidades negras,

afrocolombianas, raizales y palanqueras, el Decreto 4634 de 2011 sobre el pueblo gitano (Rrom) y el Decreto 4633 de 2011 sobre pueblos y comunidades indígenas.

- Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1482 de 2011: Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones.
- Ley 1496 de 2011: por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1542 de 2012: Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.
- Ley 1719 de 2014: Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1761 de 2015: Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. (Conmemoración a Rosa Elvira Cely)"
- Ley 1952 de 2019: Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
- Decreto 1083 de 2015, capítulo 3, Título 12 de la Parte 2 del Libro 2, reglas para lograr la paridad de género en los empleos de nivel directivo en la rama ejecutiva del orden nacional y territorial
- Ley 1952 de 2019: Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
- Ley 1959 de 2019: por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar

- Ley 2094 de 2021: Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones
- La jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, las recomendaciones y observaciones de los Comités de Naciones Unidas y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los violencias basadas en género y/o violencias sexuales, actos de racismo y de discriminación por razón de etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica o discapacidad.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Como se señaló anteriormente, el presente Protocolo tiene por objeto dar lineamientos a todas las instancias que componen el Instituto, buscando un ambiente libre de violencias y discriminación en el ámbito laboral a través de la implementación de acciones de prevención, atención y protección frente a todas las formas de violencia basadas en género, así como de los actos de racismo y de discriminación por razón de etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación y establecer herramientas efectivos para la participación de las mujeres en el Instituto.

3.2 Objetivos específicos

En este sentido, el presente protocolo busca los siguientes objetivos específicos:

- Guiar y dar lineamientos para la acción de los órganos componentes del Instituto encargados de accionar e implementar las rutas de prevención, atención y protección contenidas en el presente protocolo.
- Reconocer que existe las violencias basadas en género y las diferentes formas de discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, en el ámbito laboral y tomar acciones para prevenirlas, atenderlas, e implementar medidas de protección.
- Transformar los entornos y las creencias culturales que generen acciones de violencias en todas las formas de violencia basadas en género, así como las diferentes formas de discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector;
- Implementar rutas para garantizar la atención integral y los derechos de las víctimas de violencias basadas en género, así como de las diferentes formas de discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, raza, pertenencia étnica, nacionalidad y discapacidad en el ámbito laboral y contractual;
- Fomentar entre las personas que trabajan en el Instituto una actitud de respeto de los derechos fundamentales de las mujeres y demás sujetos de especial protección constitucional, para así reducir las formas de violencias basadas en género y/o de discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación;

- Implementar estrategias de prevención frente a todas formas de violencia basadas en género y de discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito contractual y laboral en la administración pública.
- Promover acciones que reduzcan el impacto generado por los casos de cualquier forma de violencia basadas en género, y/o de discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación sobre las víctimas.
- Crear mecanismos para la participación efectiva de las mujeres en la Entidad.

4. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

4.1. Sujetos y ámbito de aplicación

El presente protocolo aplica a los y las servidores públicos, contratistas, y demás colaboradores y colaboradoras del Icfes, en el ejercicio de sus funciones y labores, que realicen en:

- a. Todas las sedes o lugares de trabajo, instalaciones o bienes del Instituto, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo¹,

¹ Art. 3, inciso a) de la Convención 190 de la OIT

- b. En los desplazamientos, viajes, eventos, comisiones, o actividades sociales o de formación relacionados con el ejercicio de sus funciones o con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- c. En los lugares donde se paga al servidor público o servidora pública o contratista, donde éste o ésta toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios²,
- d. En las tecnologías de la información y las comunicaciones, los espacios de interacción digital y, en general en el desarrollo digital de actividades propias del cargo o de las obligaciones contractuales;
- e. En los trayectos de desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo, considerando los diferentes medios que utilice para tal fin³.

Serán igualmente destinatarios y destinatarias del presente protocolo, las personas según el tipo de relación con el Icfes:

- a. Pasantes, judicantes y practicantes;
- b. Los ciudadanos y las ciudadanas que reciben servicios o atención directa por parte del Icfes, únicamente como sujeto pasivo de las violencias y/o discriminaciones que reconoce este Protocolo;
- c. Las personas que trabajen en el Icfes a través de mecanismos de tercerización laboral;
- d. Las personas que se encuentren trabajando en comisión ante el Icfes.

² Art. 3, inciso b) de la Convención 190 de la OIT

³ Art. 3, inciso f) de la Convención 190 de la OIT

4.2. Tipos de violencias basadas en género

El presente protocolo aplica para todas las acciones y olvidos que constituyan alguna de las siguientes violencias con las mujeres o basadas en género, reconocidas en nuestra legislación nacional o en los tratados internacionales de derechos humanos:

- **Acoso laboral en razón de género:** según el artículo 2° de la Ley 1010 de 2006 “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. Según el artículo x del Convenio 190 de la OIT, constituye violencia o acoso en razón de género "la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual".
- **Violencia sexual:** La Ley 1257 de 2008, en su artículo 3°, define el daño o sufrimiento sexual en las violencias contra las mujeres como "las consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas". Por lo tanto, siguiendo la definición de esta ley, la violencia sexual en el ámbito de este protocolo incluye los delitos sexuales tipificados en el título IV del Código Penal (Ley 599 de 2000), pero no se limita sólo a estos.
- **Acoso sexual:** El artículo 2010 A del Código Penal tipifica el acoso sexual como toda conducta realizada por una persona que "en beneficio suyo o de un tercero y

valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona" (Código Penal, artículo 210A).

- **Violencia física:** La Ley 1257 de 2008, en su artículo 3, define el daño o sufrimiento físico en las violencias contra las mujeres como "el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona"
- **Violencia psicológica:** La Ley 1257 de 2008, en su artículo 3, define el daño psicológico en la violencia contra las mujeres como "las consecuencias que provienen de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal (Ley 1257 de 2008).
- **Violencia patrimonial:** La Ley 1257 de 2008, en su artículo 3, define el daño patrimonial en la violencia contra las mujeres como cualquier pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer".
- **Violencia económica:** La Ley 1257 de 2008, en su artículo 2, define la violencia económica como "cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas".
- **Feminicidio:** El artículo 104 A del Código Penal tipifica el feminicidio como "la acción de causar muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella;
- b. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad;
- c. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural;
- d. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo;
- e. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no;
- f. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella".

Las anteriores definiciones no son específicas, pueden complementarse con el reconocimiento que se haga de otros tipos de violencia basadas en género a nivel legal o a través del bloque de constitucionalidad.

4.3 Comportamientos que las personas sujetas de este Protocolo deben abstenerse de ejecutar

Las siguientes conductas son ejemplos, entre otros, de actuaciones que pueden ser que pueden generar violencias basadas en género y acoso en el ámbito laboral y, por ende, las personas sujetas del presente Protocolo deben no incurrir en ellas:

- a. Contacto físico no deseado ni consentido o acercamiento físico innecesario con connotaciones sexuales;
- b. Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros no consentidos sean estos de carácter sexual o no;
- c. Demandas o peticiones de favores sexuales, relacionadas o no, de manera directa o indirecta, a la carrera profesional y contrato, con el fin de mejorar las condiciones laborales o la conservación del puesto de trabajo o contrato;
- d. Comunicaciones o envío de mensajes o fotos por medios físicos o virtuales de carácter sexual no solicitados ni consentidos;
- e. Usar, mostrar o compartir imágenes, videos, películas, revistas, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos o cualquier otra representación de contenido sexualmente explícito o sugestivo no solicitados ni consentidos;
- f. Difusión de rumores o de información privada de las personas de orden sexual;
- g. Comentarios, burlas, humillaciones o chistes con doble sentido sexual o que reproduzcan estereotipos o prejuicios de género, racistas, capacitistas, homofóbicos, transfóbicos o asociadas el aspecto físico;
- h. Exclamaciones con alusión a prácticas eróticas y sexuales; ruidos o gestos con connotación sexual.
- i. Preguntas sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre la vida sexual no consentidas;
- j. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus funciones u otras medidas disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual;

- k. Mostrar partes genitales directamente, por videos, mensajes digitales o fotos, o por cualquier otro medio sin consentimiento;
- l. Observación clandestina de personas en lugares reservados como baños;
- m. Amenazar o condicionar el acceso al empleo o contratación, recepción de beneficios laborales o contractuales, o del mantenimiento del empleo o el contrato a la aceptación de un favor sexual
- n. Miradas morbosas o gestos sugestivos e incómodos con connotación sexual no consensuado.
- o. Imponer una carga excesiva de trabajo por rechazar proposiciones de carácter sexual.

4.4 Actos de discriminación

El presente protocolo aplica para todas las acciones y omisiones que constituyan un acto de discriminación prohibido por nuestra legislación nacional o en los tratados internacionales de derechos humanos:

Actos de discriminación: la Corte Constitucional ha definido los actos de discriminación como "la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente— anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales"⁴.

Con base en esta definición la jurisprudencia ha indicado que el acto discriminatorio contiene los siguientes elementos: " **(i)** La intención, la consciencia o la inconsciencia de la

⁴ Corte Constitucional, Sentencias T-098 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-131 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-291 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras.

conducta no incide en la configuración del acto discriminatorio. Éste se entiende realizado independientemente de la voluntad de quien lo realiza; **(ii)** el acto discriminatorio conlleva una actuación violenta en contra del sujeto receptor de la conducta, ya sea de tipo simbólica, física, psicológica, emocional, económica y demás; **(iii)** El acto discriminatorio se puede identificar a través de los criterios sospechosos de discriminación, los cuales relaciona el artículo 13 constitucional con el sexo, la orientación sexual, la raza, el origen familiar o nacional, la religión, la lengua, la opinión política, entre otros"⁵.

El artículo 3 de la Ley 1752 de 2015, que modifica el artículo 134A del Código Penal, describe como actos de discriminación cualquier acción que "arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación".

Hostigamiento por razones de discriminación: El artículo 4 de la Ley 1752 de 2015, que modifica el artículo 134B del Código Penal, cualquier actuación que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, pertenencia étnica, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación".

Discriminación como acoso laboral: La Ley 1010 de 2006 reconoce como una modalidad de acoso laboral la discriminación cuando se trata de "todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral".

⁵ Corte Constitucional, Sentencia T-141 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.

Las anteriores definiciones no son taxativas, pueden complementarse con el reconocimiento que se haga de otros tipos de violencia basadas en género a nivel legal o a través del bloque de constitucionalidad.

5. ENFOQUES DIFERENCIALES, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

5.1. Enfoques

Las actuaciones y mecanismos que se establecen en el presente protocolo deben implementarse de acuerdo con los siguientes enfoques:

- a. **Enfoque diferencial.** “El enfoque diferencial como desarrollo del principio de igualdad, en tanto trata diferencialmente a sujetos desiguales, busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre una verdadera igualdad real y efectiva, con los principios de equidad, participación social e inclusión. Dentro del enfoque diferencial, se encuentra el enfoque étnico, el cual tiene que ver con la diversidad étnica y cultural, de tal manera que teniendo en cuenta las particularidades especiales que caracterizan a determinados grupos étnicos y el multiculturalismo, se brinde una protección diferenciada basada en dichas situaciones específicas de vulnerabilidad, que en el caso de las comunidades étnicas, como lo son las comunidades indígenas, afro, negras, palanqueras, raizales y Rom, se remontan a asimetrías históricas. Dicho principio, permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos, por lo que partiendo del

reconocimiento focalizado de la diferencia se pretenden garantizar los principios de igualdad, diversidad y equidad⁶”.

- b. **Enfoque de género.** “Se fundamenta en evidenciar las desigualdades, inequidades y discriminaciones, que se generan a partir de roles, estereotipos, creencias, mitos, prácticas e imaginarios y relaciones de poder, por medio de los cuales se normaliza la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Desde este enfoque, las autoridades del Estado deben desarrollar acciones dirigidas a modificar patrones culturales, que se fundamentan en roles, estereotipos, prácticas e imaginarios, así como intervenir las relaciones asimétricas de poder que naturalizan la violencia por razones de sexo o género⁷”.
- c. **Enfoque de discapacidad.** “El enfoque de discapacidad parte de la necesidad de identificar y caracterizar a las personas con discapacidad y sus factores contextuales para contribuir en la visibilización de esta población y en la focalización de acciones afirmativas orientadas a la inclusión y garantía de sus derechos⁸”.
- d. **Enfoque étnico con perspectiva antirracista** El enfoque étnico se basa en el reconocimiento que la Constitución Política de 1991 hace de Colombia como un país pluriétnico y multicultural, que protege los derechos fundamentales a la diversidad cultural y lingüística, la identidad, la participación, la autonomía y el gobierno propio de los pueblos étnicos. La aplicación del enfoque étnico – racial implica la realización de un análisis diferenciado de las situaciones de violencia basadas en género, dirigido a identificar si el mismo se ejerció en razón de la pertenencia a un determinado pueblo étnico – racial, de manera que pueda

⁶ Corte Constitucional, sentencia T-OIO de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera

⁷ Artículo 4.2 del Decreto 1710 de 2020, “por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su implementación”

⁸ Definición del DANE, ver: El%20enfoque%20de%20discapacidad%20parte.

constituir discriminación racial, y a establecer medidas diferenciales de prevención y erradicación de estas conductas en el ámbito del trabajo. El enfoque étnico debe estar basado en “una perspectiva antirracista de manera participativa y plural”⁹.

- e. **Enfoque interseccional:** perspectiva que permite conocer la presencia simultánea de dos o más características diferenciales de las personas (género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, raza, etapa del ciclo vital, pertenencia étnica y campesina entre otras) que en un contexto histórico, social y cultural determinado incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias sustantivamente diferentes entre los sujetos (adaptado de Corte Constitucional-Sentencia T-141-15). “”¹⁰.
- f. **Enfoque de curso de vida:** ‘Constituye una perspectiva que permite reconocer en los distintos momentos de vida, las trayectorias, sucesos, transiciones, ventanas de oportunidad y efectos acumulativos que inciden en la vida cotidiana de los sujetos, en el marco de sus relaciones y desarrollo. Este enfoque se orienta desde el reconocimiento del proceso continuo de desarrollo a lo largo de la vida. Desde este enfoque, se plantea que desarrollar atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un periodo anterior”¹¹.

⁹ Definición de la Comisión de la Verdad, ver: <https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/enfoques/etnico#:~:text=El%20Enfoque%20C3%89tnico%20representa%20un,de%20manera%20participativa%20y%20plural>.

¹⁰ Artículo 4.3 del Decreto 1710 de 2020.

¹¹ Artículo 4.5 del Decreto 1710 de 2020.

5.2. Principios

El presente Protocolo se rige por los siguientes principios:

- a. **Información y accesibilidad:** Las rutas de atención, prevención y protección deben ser públicas y socializadas a todo el personal del Instituto. Este protocolo contará con formatos accesibles (documentos en lectura fácil, braille, lengua de señas, entre otros) y con espacios físicos y digitales accesibles para una adecuada atención.
- b. **Confidencialidad:** La información y actuaciones presentadas en virtud del presente protocolo, en lo que resulte procedente, serán confidenciales, de conformidad con las leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y demás disposiciones que resulten aplicables.
- c. **Buena fe:** Todas las personas que intervengan en el procedimiento deben actuar de buena fe.
- d. **Imparcialidad e idoneidad:** Las personas que participen en nombre del Instituto en las rutas de atención deben obrar de manera imparcial, ética y, estar capacitadas en enfoque de género y diferencial.
- e. **Dignidad:** Todas las personas involucradas en el proceso deben ser tratadas con dignidad y respeto.
- f. **Debido proceso:** Todas las actuaciones deben respetar las garantías procesales conforme a la Constitución y la ley.
- g. **Debida diligencia:** La obligación de atender casos de violencia y/o discriminación de manera rápida y efectiva, desde el momento de la queja hasta el cierre de la ruta de atención.
- h. **No discriminación:** Todas las personas, independiente a sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, pertenencia étnica o raza, orientación sexual o identidad de género, procedencia rural o urbana, religión, discapacidad, nacionalidad, entre otras, serán atendidas de acuerdo a la ruta establecida por el presente protocolo.

- i. **Principio de no revictimización:** Las personas encargadas de la implementación de las rutas a las que se refiere el presente protocolo deberán prevenir, en todo momento, la revictimización, evitando exponer a las víctimas a situaciones como la confrontación con el ofensor/a o la reiteración del relato de los hechos, y absteniéndose de incurrir en cuestionamientos sobre la veracidad del relato de la víctima o la justificación del ofensor/a, particularmente cuando se trate de hechos constitutivos de violencia basada en género y violencias contra las mujeres.

6. DERECHOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS

6.1. Derechos de las víctimas

De conformidad con las normas legales, las víctimas de todas las formas de violencias basadas en género, racismo o discriminación tendrán los siguientes derechos, y acorde con las capacidades del Instituto:

- a. Recibir medidas de prevención, atención y protección para evitar un daño irremediable a través de la activación de las rutas contenidas en este protocolo;
- b. Derecho a que la queja presentada no afecte su estabilidad laboral o contractual en el Instituto, y a que no se tomen represalias en su contra;
- c. A que se dé credibilidad a su relato, bajo el principio de buena fe, y a que éste sea escuchado y atendido de manera objetiva y libre de prejuicios de cualquier índole;
- d. El derecho a que no ser revictimizada mediante juicios de valor sobre su queja o siendo forzada a la confrontación con el presunto agresor(a);
- e. Derecho a recibir asistencia y acompañamiento permanente por parte del Instituto, incluyendo asistencia técnica legal y psicosocial;

- f. Ser atendida por personas formadas en derechos humanos y/o enfoque diferencial;
- g. Pedir traslado del área de trabajo o lugar de trabajo, o presentar una solicitud para trabajar de manera remota mientras se resuelve la queja;
- h. Solicitar al superior que se tomen medidas para no tener que realizar labores que impliquen interacción o acercamiento con el sujeto activo de la conducta hasta que no se resuelva la queja;
- i. Recibir información durante toda la ruta de atención desde la presentación de la queja;
- j. Todas las demás medidas que sean necesarias para garantizar la protección y garantías de no repetición de los hechos.

6.2. Derechos de las mujeres víctimas

De conformidad con el artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, las mujeres víctimas de los diferentes tipos de violencia contempladas en este protocolo tienen derecho a:

- a. Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad;
- b. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia; para tales efectos se acudirá a la Defensoría Pública.
- c. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes;

- d. Dar su consentimiento informado para los exámenes médico - legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo de la persona encargada de realizar el examen para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de profesionales de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia;
- e. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva;
- f. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia;
- g. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas;
- h. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas;
- i. La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia;
- j. La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la Ley 1257 de 2008;
- k. A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo;
- l. Adicionalmente, visibilizar o comunicar públicamente todas las formas de violencia basadas en género de las que fue víctima, como parte de su libertad de expresión, respetando los datos privados o semiprivados del presunto agresor, conforme a lo señalado en las Sentencias T-275/21 y T-061 de 2022 de la Corte Constitucional,

La Subdirección de Talento Humano será encargada de garantizar la observancia de los derechos de las mujeres víctimas contenidos en la Ley 1257 de 2008, atendiendo las

recomendaciones que surjan de la instancia interna encargada y del Comité de Convivencia. No obstante, estos derechos deben ser respetados e implementados por todo el personal y órganos del Instituto que tengan algún rol en las diferentes rutas de atención contenidas en el presente Protocolo.

6.3. Derechos del sujeto activo

La persona o personas contra quienes se formula la queja se les respetarán sus derechos legales y constitucionales, entre ellos:

- a. Conocer la totalidad de los hechos que se presentaron en la queja y las pruebas aportadas hasta el momento.
- b. Derecho a la defensa y, en caso de que lo considere necesario a la defensa técnica;
- c. Reconocer la responsabilidad total de los hechos que se presentaron en la queja;
- d. Negar la responsabilidad total de los hechos que se presentaron en la queja, presentar pruebas y testimonios que fundamenten su defensa y solicitar pruebas adicionales.
- e. Derecho al debido proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

7. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIONES

7.1. Medidas de prevención

Las acciones de prevención son una forma de intervención temprana ante posibles manifestaciones de conductas de acoso u hostigamiento sexual o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad y demás razones de discriminación cuyo objetivo sea minimizar los riesgos que generan las violencias, sensibilizar sobre la importancia de mantener un entorno laboral seguro y garantizar la no repetición de los hechos.

Para ello, el Icfes, en el marco de sus capacidades y disponibilidad de recursos, deberá desarrollar acciones formativas periódicas, al menos, una vez cada semestre, a través de jornadas, campañas de sensibilización, entre otras dirigidas a todas las personas que laboran en la entidad sin importar su tipo de vinculación o contratación y que incluyan como mínimo los siguientes aspectos:

- a. Interiorización de los enfoques diferenciales, principios y las definiciones de las diferentes formas de violencia basadas en género, y/o la discriminación por sexo, género, orientación sexual, identidad de género, raza, pertenencia étnica, nacionalidad y discapacidad en el ámbito laboral y contractual.
- b. Sensibilización a todas las personas que laboren o presten sus servicios en el Instituto en el conocimiento de las leyes, los convenios, tratados, acuerdos, normas y estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer y demás sectores poblacionales históricamente discriminados;

- c. Identificación de las conductas constitutivas de violencia basadas en género y/o discriminación por sexo, género, orientación sexual, raza, pertenencia étnica, nacionalidad y discapacidad en el ámbito laboral y contractual.
- d. Pedagogía e información sobre las consecuencias administrativas y judiciales que implica la comisión de actos de violencia basadas en género y/o discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, raza, pertenencia étnica, nacionalidad y discapacidad.
- e. Difusión de las rutas de atención de quejas o denuncias.
- f. Recepción de las quejas, atención de los casos de violencias basadas en género o discriminación, para que conozcan e implementen el enfoque diferencial, de género y étnico-territorial, el cual debe ser incluido en todas las etapas de formulación e implementación de la política pública del sector; dirigido, especialmente, a las personas que hacen parte del área de talento humano.
- g. Promover campañas pedagógicas y de comunicación sobre el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres;
- h. Publicar en un lugar visible del Instituto, así como en su página web institucional o intranet, la ruta de atención integral contenida en el protocolo.

7.2. Sistemas de información

Para lo anterior se establecerá un sistema de información confidencial para recopilar las quejas de violencias basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual, identidad de género, o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual. Este sistema estará a cargo de la Subdirección de Talento Humano, con acceso exclusivo del subdirector o subdirectora y el servidor o servidora que de la misma área haga parte del Comité de Convivencia.

Esta información, con el consentimiento informado, podrá ser usada para caracterizar este tipo de violencias dentro del Instituto, diseñar las estrategias de prevención y evaluar periódicamente la eficacia del presente protocolo y sus rutas de atención para su prevención y eventual erradicación.

La evaluación de las rutas de atención debe hacerse, por lo menos, 2 veces al año. Para estos efectos el Instituto llevará a cabo encuestas con las personas sujetas al presente protocolo (artículo 3) para determinar la efectividad y satisfacción con las rutas y construirá unos indicadores que permitan establecer metas de cumplimiento.

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El Icfes a través de la Subdirección de Talento Humano en el marco de sus capacidades y recursos disponibles, desplegará las siguientes medidas:

- a. Separar a la víctima de lugares o situaciones de riesgo;
- b. Asignar medidas de vigilancia o acompañamiento;
- c. Iniciar la ruta de atención en forma inmediata para la protección de los derechos de la víctima;
- d. Ofrecer un cambio temporal de dependencia a la víctima;
- e. Implementar mecanismos que garanticen la protección del buen nombre de la víctima;
- f. Dar orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal a las víctimas, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica;
- g. Poner en conocimiento de las autoridades competentes en caso de considerarlo necesario.

- h. Cuando resulte procedente, generar los mecanismos necesarios para asegurar que la víctima y el sujeto activo de la conducta no trabajen en el mismo equipo, dependencia o espacio físico, con el fin de evitar cualquier tipo de confrontación o contacto que pueda dar lugar a actos revictimización o a la repetición de los hechos;
- i. Las demás que sean necesarias para garantizar los derechos de la víctima y la no repetición de los hechos.

De ninguna manera las medidas de protección pueden desmejorar la situación o condición laboral o contractual de la víctima.

Las medidas de protección se deben adoptar en las primeras setenta y dos (72) horas contadas a partir de la presentación de la queja, con el fin de proteger los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia basadas en género o discriminación.

9. RUTAS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

9.1. Disposiciones generales para las rutas de atención

9.1.1. Deberes de los superiores

Cuando se presente un caso de violencia basada en género o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, las personas que ostenten una posición de superioridad jerárquica, especialmente los servidores en cargos de dirección, los supervisores de contratos o servidores que ejerzan roles de coordinación o dirección tienen la obligación de activar las rutas internas de atención, poniendo en

conocimiento de la Subdirección de Talento Humano la situación para activar las medidas correspondientes. Los correos, chats o cualquier otra comunicación escrita o verbal constituirán prueba de este conocimiento, de conformidad con la ley.

Además, deben procurar por no propiciar espacios o situaciones de riesgo o revictimización en las que la víctima sea obligada a interactuar con el agresor, de promover espacios para la transformación cultural dentro del Instituto y de focalizar acciones encaminadas a la prevención.

El incumplimiento de este deber, da lugar a la acción disciplinaria conforme a los numerales 25 y 26 del artículo 38 y 242 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, cuya falta disciplinaria puede ser calificada como grave conforme a los criterios establecidos en el artículo 47 de la misma ley.

9.1.2. Integralidad de la acción disciplinaria

Al momento de aplicar los criterios para determinar la gravedad o levedad de las faltas y graduar la sanción y durante toda la actuación disciplinaria, quienes ejerzan o participen en las diferentes etapas de la actuación disciplinaria propenderán por la aplicación integral y adecuada de los principios, normas, jurisprudencia y bloque de constitucionalidad relacionado con la violencia basado en género y/o discriminación por razón de sexo, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, discapacidad y demás formas de discriminación.

Los órganos competentes de las rutas de atención no deben analizar las quejas de manera separada, sino que deben buscar identificar patrones de comportamiento tanto individuales como institucionales que reproduzcan las violencias o discriminaciones objeto de este Protocolo, haciendo uso del sistema de información contemplado en el presente Protocolo.

9.1.3. Continuidad de la ruta de prevención

La renuncia al cargo o la terminación del contrato o vinculación con el Instituto no extingue la obligación del Instituto de dar plena aplicación a la ruta de prevención, atención y protección integral.

9.1.4. Deber de denunciar de los servidores públicos

En aquellos casos en que la víctima no quiera denunciar los hechos y estos puedan constituir un delito, contravenciones y faltas disciplinarias, los servidores públicos que tengan conocimiento de estos tienen el deber legal de presentar la denuncia ante la autoridad competente¹². El deber de denuncia debe ejercerse atendiendo al principio de no revictimización.

9.2. Rutas externas de atención externas

El Instituto brindará el apoyo jurídico y psicosocial a que haya lugar para que las víctimas puedan denunciar los hechos ante las entidades correspondientes tanto en materia penal (acudiendo a la Fiscalía, entre otros) como disciplinaria (acudiendo a la Procuraduría, entre otros), cuando haya lugar. Para esto se le brindará información completa y oportuna de las rutas de atención integral a las violencias basadas en género y los actos de racismo y discriminación reconocidos por este Protocolo.

¹² Ley 1952 de 2019, artículo 38, numeral 25

9.3. Rutas de atención en caso de queja contra servidores públicos del Instituto

9.3.1. Recepción de la queja y análisis de las pruebas

Toda persona que haya sido víctima de alguna forma de violencia basada en género, o de un acto de racismo o discriminación en el ámbito laboral o contractual, en el marco de lo establecido en el presente Protocolo, podrá presentar su queja de manera escrita o verbal ante la Subdirección de Talento Humano. El proceso de recepción debe garantizar la no revictimización de las víctimas, por lo que no se deben poner trabas innecesarias, suspender el proceso bajo argumentos meramente procesales, ni hacer repetir a la víctima los hechos que ya han sido presentados de manera oficial ante el operador de Control Disciplinario Interno del Instituto.

9.3.2. Órgano competente de control interno disciplinario

Sin perjuicio de la competencia preferente y las competencias especiales previstas en la ley para la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría General, en sus funciones de Control Interno Disciplinario es competente para investigar y fallar las faltas disciplinarias originadas en quejas e informes relacionados con violencia basado en género y/o discriminación por razón de sexo, género, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, discapacidad y demás formas de discriminación, cometidas por servidores públicos, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021.

En caso de que la Secretaría General en sus funciones de Control Interno Disciplinario no sea competente, remitirá en el menor tiempo posible la queja o informe al competente y dará cumplimiento a lo establecido para la ruta externa, dejando registro de la queja e informe para el sistema de información indicado en este protocolo.

9.3.3. Reglas de procedimiento

El trámite de las quejas disciplinarias por violencia basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, identidad de género u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación seguirán el procedimiento establecido por las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021. En toda la ruta prevalecerá el derecho sustancial sobre lo formal¹³, por lo que, las normas procesales deben interpretarse a la luz de los enfoques, principios y derechos de las partes, reconocidos en el presente Protocolo, así como los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencias basadas en género y discriminación.

9.3.4. Enfoque diferencial y de género en la ruta de atención interna

En caso de que la Oficina de Control Disciplinario Interno requiera programar una entrevista con la víctima para recopilar información o pruebas adicionales a las enviadas en la queja, deberá tomar medidas para garantizar la no revictimización, entre ellas citar en un espacio seguro (presencial o virtual), no realizar pruebas o preguntas repetitivas y no preguntar por información que constituya una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad. Los medios de prueba de delitos de violencia sexual pueden ser obtenidos de una amplia gama de fuentes, no sólo de la víctima.

En casos de violencia o acoso sexual, se deben tener en cuenta los criterios establecidos por la Corte Constitucional en materia de pruebas¹⁴: **(i)** no valorar evidencia sobre el

¹³ Esta regla ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional, en sentencias como la SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

¹⁴ Corte Constitucional, Auto 009 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-126 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

pasado sexual de la víctima o sobre su comportamiento posterior a los hechos; **(ii)** considerar de manera restrictiva los elementos probatorios sobre el consentimiento de la víctima; **(iii)** no desestimar los testimonios de las víctimas por presentar contradicciones, pues éstas son frecuentes en eventos traumáticos como la violencia o acoso sexual; **(iv)** no desestimar los testimonios de las víctimas por no haber sido obtenidos en las primeras comunicaciones o entrevistas, pues dicha omisión puede deberse, entre otras razones, a temores por razones de seguridad; **(v)** abstenerse de desestimar una acusación de violencia sexual por no existir evidencia física de penetración", ya que la violencia sexual no se limita a los eventos de acceso carnal; **(vi)** apreciar en conjunto la evidencia teniendo en cuenta el contexto en el que se presentó la violencia sexual; **(vi)** apreciar en conjunto la evidencia teniendo en cuenta el contexto en el que se presentó la violencia sexual; y **(vii)** prestar especial atención al testimonio de la víctima, teniendo en cuenta que en la mayoría de los eventos de violencia sexual no hay otros testigos, razón por la cual el testimonio de la víctima debe valorarse como un indicio de la ocurrencia del delito.

En caso de discriminación se deben tener en cuenta los criterios establecidos por la Corte Constitucional en materia de pruebas: "debido a las complejidades que supone la demostración de un acto discriminatorio, pues en muchas ocasiones los afectados no cuentan con los medios suficientes para probar la existencia de éstos, en casos como el presente opera una presunción de discriminación, de tal manera que quien es señalado de incurrir en esta conducta tiene la carga de presentar de forma efectiva la prueba en contrario respectiva. A partir de lo anterior, en los casos donde se discuta la existencia de un trato basado en cualquiera de las categorías sospechosas de discriminación, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el concepto de "carga dinámica de la prueba", conforme al cual se traslada la obligación de probar la ausencia de discriminación a la parte accionada, quien, al encontrarse en una situación de superioridad, tiene una mayor capacidad para aportar los medios probatorios que demuestren que su proceder

no constituyó un acto discriminatorio, por lo que resulta insuficiente para el juez la simple negación de los hechos por parte de quien se presume que los ejecuta"¹⁵.

9.3.5. Clasificación de las faltas

Con fines de orientación para las autoridades públicas que participan en la prevención, atención y sanción, y sin que se pueda considerar una clasificación excluyente, limitadora y completa, se enuncian algunas conductas que constituyen actos de violencia basadas en género y/o discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, discapacidad y demás formas de discriminación, y se hace una consideración de su gravedad y levedad acorde con la definición prevista para las faltas gravísimas en el Libro II, Capítulo I del Código General Disciplinario y sin perjuicio de los criterios de calificación establecidos en la Ley 1952 de 2019.

9.3.5.1. Gravísimas

Son faltas gravísimas todas las establecidas en la Ley 1952 de 2019, incluyendo las siguientes:

- a. Todas las conductas de violencia basadas en género, y/o discriminación por razón de sexo, género, raza, pertenencia étnica, nacionalidad, orientación sexual y discapacidad que se adecúen a una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo (artículo 65, Ley 1952 de 2019). Esto incluye, entre otros, los delitos tipificados en los artículos

¹⁵ Corte Constitucional, Sentencias T-098 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-741 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-335 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-068 de 2021, M .P. Diana Fajardo Rivera.

104A, 134A, 134B, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210A, 213, 213A, 24, 215, 216, 217, 218, 219, y 219A del Código Penal.

- b. Todas las conductas que constituyan graves infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario conforme los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia (Artículo 52, numeral 2, de la Ley 1952 de 2019). Esto incluye aquellas conductas que configuren una grave violación de tratados como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; el Tratado sobre derechos de personas con discapacidad; el Convenio 169 de la OIT, y demás tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario ratificados por Colombia.
- c. Infligir a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. (Artículo 52, numeral 4 de la Ley 1952 de 2019).
- d. Realizar, promover, o instigar a otro servidor público a ejecutar actos de hostigamiento, acoso o persecución, contra otra persona en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología política o filosófica (Artículo 53, numeral 4 de la Ley 1952 de 2019).

9.3.5.2. Pautas orientadoras para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria

Con fines de orientación para los operadores disciplinarios, al momento de determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria aplicando los criterios establecidos en el artículo 47 de la Ley 1952 de 2019 y en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, se tendrán en cuenta los enfoques contenidos en el presente Protocolo, En especial, al analizar el criterio de "trascendencia social de la falta o el perjuicio causado" (art. 47, numeral 5, de la Ley 1952 de 2019) se debe tener en cuenta lo establecido en la jurisprudencia de la

Corte Constitucional frente a las violencias y discriminación reconocidas en este protocolo:

1. "Las violencias basadas en género son uno de los fenómenos sociales que más afectaciones producen sobre la vida de quienes las enfrentan de manera cotidiana y constante a lo largo de sus vidas. Las mujeres, las adolescentes y las niñas al ser las principales víctimas de este fenómeno enfrentan un sin número de efectos físicos, mentales y emocionales que configuran y determinan de forma directa sus vidas"¹⁶.
2. "Existen algunos aspectos mínimos que debe tener en cuenta el juez constitucional para analizar y valorar el impacto en los derechos fundamentales y en la dignidad de una persona, que pueda tener un determinado escenario de discriminación: (i) Según esa misma jurisprudencia, uno de los cuatro aspectos que configura el escenario de discriminación es la relación de poder existente entre el sujeto pasivo de la discriminación y quien despliega la conducta reprochable e inconstitucional. (...) (ii) Otro elemento es la relación existente entre la persona o conjunto de personas que hacen las veces de público. Puede ocurrir que la afectación no sea la misma si el maltrato tiene lugar frente a personas con quienes se comparte periódicamente (compañeros de trabajo o grupo escolar), a si este acaece ante un público transitorio y meramente circunstancial. (iii) Igualmente, se ha advertido la relevancia del espacio donde acontece la afrenta. Este puede ser público o privado, o marcadamente reglado (salón de clase, taller, despacho judicial, cuartel, etc.), lo cual puede inhibir mecanismos de defensa frente a la agresión; (iv) Se ha incluido como cuarto elemento la duración de la puesta en escena, pues el grado de

¹⁶ Corte Constitucional, Sentencia T-316 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

vergüenza ira o humillación puede variar según el escenario sea prolongado o efímero"¹⁷.

9.4. Ruta de atención en caso de queja contra contratistas, pasantes, judicantes, practicantes o personal en comisión

9.4.1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el Protocolo

El Icfes vigilará la correcta ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de este Protocolo.

Quien realice la vigilancia de la ejecución del contrato, ya sea mediante la supervisión o mediante la interventoría, puede hacer uso de las facultades previstas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 para hacer el seguimiento al cumplimiento obligacional del contrato y estará sometido a los deberes y responsabilidades que implica el ejercicio de dicha actividad.

9.4.2. Traslado a la autoridad competente

En caso de que la queja presentada sea contra un contratista, pasante, judicante o practicante, la Oficina de Control Interno o la Subdirección de Talento Humano deberán remitir inmediatamente la información a la Procuraduría General de la Nación para que esta entidad inicie la investigación correspondiente, de ser procedente.

9.4.3. Medidas administrativas para la no repetición

¹⁷ Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

El Icfes deberá adoptar lineamientos tendientes a prevenir, atender y proteger la comisión de conductas de violencias basadas en género o cualquier tipo de discriminación por parte de los contratistas de prestación de servicios. En este espíritu se fomentará la creación de espacios de apoyo para contratistas que hayan sido víctimas de todas las formas de discriminación contempladas en el presente Protocolo. Estos espacios prestarán apoyo a los contratistas en la orientación hacia las rutas de apoyo pertinentes.

10. MEDIDAS DE REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

10.1. Obligación de implementar medidas de reparación y no repetición

Se adoptarán medidas para garantizar un proceso de atención idóneo e integral, ajustado a las particularidades de cada caso, enfocado siempre en el respeto, transparencia e integridad. Se evitarán a toda costa las acciones que configuren una victimización secundaria en cualquier etapa del proceso. La dependencia del Instituto respectiva buscará, a lo largo del proceso, llegar a un acuerdo con la víctima frente a la implementación de medidas de reparación institucionales e individuales pertinentes que cumplan con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

10.1.1 Espacios colectivos

Espacios colectivos de formación, reflexión y sensibilización frente a las violencias descritas en este protocolo (para todos, pero obligatorios para los presuntos agresores),

reconociendo la importancia de transformar los entornos y las creencias culturales habilitantes de violencias basadas en la discriminación.

Generar espacios de encuentro en los cuales se pueda construir y descubrir nuevas formas de habitar el mundo y ser hombres.

Realizar un acompañamiento psicosocial de acuerdo con las capacidades institucionales disponibles.

Espacios de socialización a todo el instituto donde se haga una rendición de cuentas que aborde la información proveniente del sistema de datos y se tomen medidas de acuerdo a los patrones identificados.

11. MECANISMOS EFECTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ICFES

La Subdirección de Talento Humano establecerá estrategias encaminadas a garantizar la participación efectiva de las mujeres en la Entidad. Como algunas de esas estrategias se encuentran:

- a. Revisión semestral del cumplimiento de las reglas para lograr la paridad de género en los cargos directivos conforme lo establecido en la ley.
- b. Propiciar que, en los comités establecidos en la ley, como el de convivencia, paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), comisión de personal, entre otros, siempre se cuente con una miembro principal, mujer, en representación de todas las mujeres que hacen parte del Icfes.

- c. Realizar encuestas de bienestar que permitan dar cuenta del goce efectivo de los derechos de las mujeres y tomar medidas para avanzar en este camino.